

Crisis capitalista y autogestión obrera: empresas recuperadas en Argentina

***Crise capitalista e autogestão trabalhista:
empresas recuperadas na Argentina***

***Capitalist crisis and workers' self-management:
recovered enterprises in Argentina***

*José Miguel Candia**

Resumen

A finales de 2001 la sociedad argentina vivió un adelanto del apocalipsis. La aplicación estricta de las políticas neoliberales había dado sus frutos: la desregulación del mercado de trabajo multiplicó la precariedad laboral y el empleo con bajos salarios y sin prestaciones; la privatización de las empresas y organismos públicos dejó en la calle a miles de trabajadores y alejó al Estado de áreas sustantivas como la producción de petróleo y la prestación de servicios básicos, luz y agua potable, educación y salud, entre otros; la liberalización del mercado financiero provocó fuga de capitales y llevó a imponer, como recurso extremo, el bloqueo de los depósitos bancarios. La respuesta de los trabajadores se canalizó bajo dos formas principales de lucha: 1) se constituyeron las agrupaciones “piqueteras” desde los barrios y municipios, y 2) otro segmento de trabajadores decidió tomar en sus manos la administración de los establecimientos que estaban en proceso de quiebra o cierre temporario, lo que dio lugar a la aparición del movimiento de “empresas recuperadas”. Este fenómeno social es el motivo de análisis del presente ensayo.

Palabras clave: desempleo, crisis, recesión, organizaciones piqueteras, movimiento de empresas recuperadas, cooperativismo y autogestión.

Resumo

No final de 2001 a sociedade argentina viveu um avanço do apocalipse. A aplicação estricta das políticas neoliberais havia dado seus frutos: a desregularização do mercado de trabalho multiplicou a precariedade laboral e o emprego com baixos salários e sem benefícios; a privatização das empresas e organismos públicos deixou na rua milhares de trabalhadores e distanciou o Estado de áreas importantes como a produção do petróleo e a prestação de serviços básicos, luz e água potável, educação e saúde, entre outros; a liberalização do mercado financeiro provocou a fuga de capitais

* Sociólogo. Doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Consultor en el Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”. E-mail: <jcandia17@gmail.com>.

e levou a impor, como recurso extremo, o bloqueio dos depósitos bancários. A resposta dos trabalhadores de canalizou sob duas formas principais de luta: 1) constituíram-se os agrupamentos “piqueteiros” nos bairros e municípios, e 2) outro segmento de trabalhadores decidiu tomar nas suas mãos a administração dos estabelecimentos que estavam em processo de quebra ou fechamento temporário, o que deu lugar à aparição do movimento de “empresas recuperadas”. Este fenômeno social é o motivo de análise do presente ensaio.

Palavras chave: desemprego, crise, recessão, organizações “piqueteiras”, movimento de empresas recuperadas, cooperativismo e autogestão.

Abstract

At the end of 2001 Argentina lived a preview of the apocalyptic economic crisis after a high dose of neoliberal policies. Deregulation deepened labor conditions at work and increased low-wage employment with less social benefits. Privatization of State-owned industries and public agencies left thousands of workers in the streets and diminished the power of the State over such areas as the oil industry, services, clean water, education and health, among others. Liberalization of the financial market caused an outflow of capital and forced the Central Bank to block people from getting money out of their saving accounts. The workers response was channeled through two forms: 1) people started out picket lines in local municipalities and neighborhoods, and 2) others decided to take the management of bankrupt establishments into their own hands, which gave rise to the emergence of a movement called “recovering enterprises”. Such issue is analyzes in this paper.

Keywords: unemployment, crisis, recession, picketing lines, movement of recovering enterprises, cooperativism and self-management.

Antecedentes

Los acontecimientos de finales del año 2001 marcaron un punto de ruptura en las prácticas sociales y en las formas asociativas y de convivencia de las clases populares argentinas. Como si se tratara del ensayo de un esquema macabro de “ajuste económico *versus* tolerancia social”, el derrumbe del programa de “convertibilidad” (un peso, un dólar) y los efectos de las políticas privatizadoras establecidas por el gobierno de Carlos Menem en 1991, destruyeron los soportes y referentes a partir de los cuales los sectores sociales definen sus expectativas de vida y formulan sus demandas. De manera injustificada el presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) sostuvo la política económica heredada del régimen anterior y, para diciembre de ese año, el coctel de variables adversas no podía ser más contundente: hiperinflación; desempleo; control de los depósitos bancarios, y recesión (Basualdo, 2002).

El Plan de Convertibilidad (1991-1999), formulado por el ministro Domingo Cavallo, fue la expresión local de un durísimo programa neoliberal de reestructuración de la economía argentina. Dicho plan tuvo dos ejes principales: a) la llamada “reforma del Estado” que implicó la transferencia de la mayoría de las empresas y organismos públicos a manos privadas. Petróleo, agua y electricidad, ferrocarriles, aerolíneas, correos, administración de carreteras y servicios telefónicos, fueron, entre otros entes

públicos, botín de guerra para los grandes corporativos privados, y b) implantar una paridad cambiaria artificial de “un peso igual un dólar”, lo que propició que se multiplicaran las importaciones y el quiebre de un vasto segmento de empresas nacionales incapaces de competir con los bienes que se importaban a precios insostenibles para los productores locales. Mientras las exportaciones de “bienes transables” –alimentos principalmente– tuvieron una demanda externa sostenida y los precios internacionales eran elevados, el gobierno de Carlos Saúl Menem pudo asegurar el pago regular de la deuda externa y ofrecer un suministro generoso de divisas para millones de consumidores que encontraban en el dólar una fuente de ahorro y la “mercancía” más barata del mercado.

A partir de 1998, el cambio de las condiciones económicas internacionales y la caída de las exportaciones modificaron drásticamente el panorama. Sin un flujo abundante de divisas resultaba insostenible prolongar el “uno a uno” y tolerar la venta libre de dólares en el mercado interno. Como la devaluación del peso fue descartada, el declive se hizo inevitable, hacia finales del gobierno de Menem (1999) la economía ingresaba en una fase de recesión que, poco después, terminaría en catástrofe.

Pero la historia suele ser injusta y le tocó al presidente Fernando de la Rúa pagar el precio del colapso del programa que había impuesto Menem. Bajo las condiciones mencionadas no hubo barrera institucional o política que pudiera atajar los desbordes sociales. Los días 19 y 20 de diciembre de 2001 se produjeron enfrentamientos entre policías y manifestantes, un vasto segmento de inconformes integró las columnas que protestaban por la pérdida de sus ahorros y por el derecho a un empleo digno. Capas medias de ahorristas, castigados por los controles bancarios establecidos sobre sus depósitos, se encontraron, codo a codo, con las víctimas de la desregulación laboral y la precarización del mercado de trabajo. Fue en este contexto que se redobló la militancia del “movimiento de trabajadores desocupados” (*piqueteros*) y se expandió la ocupación de empresas por parte de sus propios trabajadores, cuando se encontraban en vísperas de cierre o despido del personal (Cieza, 2001).

Hay un elemento fuertemente constitutivo que debe jerarquizarse al analizar este fenómeno: la recuperación de empresas está directamente vinculada con el propósito de los trabajadores que pierden su fuente de empleo, de preservar la fábrica como el espacio donde se generan y reproducen sus identidades laborales y sociales. Por lo tanto, es uno de los componentes más relevantes en este intento de rearticulación del mundo del trabajo por parte de sectores subalternos de la sociedad argentina. Se trata de una experiencia en la que coexisten las antiguas tradiciones laborales y sindicales con las nuevas experiencias y saberes de la autogestión, en algunos casos, y de la cogestión y el control obrero de la producción en otros. Conviven, de esta manera, en un escenario diverso, las prácticas convencionales del trabajo asalariado

con formas asociativas de producción derivadas de la quiebra o el cierre de las empresas.

El desarrollo de esta compleja dinámica de recuperación de las unidades productivas bajo un régimen de autogestión o de cogestión ha generado cambios y nuevas formas de organización de la cultura del trabajo y de los saberes técnicos de obreros y empleados.

En algunas experiencias esta nueva cultura recupera las mejores tradiciones de la lucha sindical y, en otras, hace valiosos aportes a la actualización de la organización del trabajo bajo formas asociativas. En ambas vertientes se establecen complejas y dinámicas relaciones entre el colectivo de obreros y empleados, las instituciones y órganos del Estado, y el conjunto de la economía en general. Al mismo tiempo, se abren vasos comunicantes con las fuerzas políticas, los grupos sociales que orienta la Iglesia católica, las asociaciones civiles y las universidades. En este sentido, son de particular relevancia los vínculos que han establecido algunas empresas recuperadas y la Pastoral Social. Se trata de un nuevo espacio ideológico en el cual convergen las tradiciones laborales transmitidas de una generación a otra con los desafíos de las innovaciones administrativas y tecnológicas de los últimos 30 años. De esta forma, se generan nuevas prácticas socio-técnicas que ponen en marcha los trabajadores responsables de mantener abiertas las empresas recuperadas (Martínez, 2004; Rebón, 2004).

Al referirse a las ocupaciones fabriles, Enrique Martínez señala:

Sin un adecuado marco legal; con permisos precarios de los jueces; con la permanente amenaza latente del remate de los bienes; sin capital de trabajo ni patrimonio propio o ajeno para poner en valor máquinas que han estado paradas por meses o años; con debilidades tecnológicas (...) aún así, grupos de hombres y mujeres se han aferrado a su identidad, sus saberes y su historia común, para construir una esperanza y pensar en hacer una vida mejor para ellos y sus familias (2004).

Es importante enfatizar que la rehabilitación de las empresas cerradas o en vías de quiebra se inició como respuesta a la crisis económica que hacia finales de los noventa derrumbó el Programa de Convertibilidad del gobierno del presidente Menem que estaba vigente desde 1991. Ante la quiebra, disolución o abandono de las empresas por parte de sus dueños, los trabajadores decidieron autogestionar los establecimientos y mantenerlos produciendo. Después de cuatro años (1998-2002) de recesión ininterrumpida y con niveles de desempleo abierto cercanos al 20 por ciento, los obreros ocupados en el sector industrial y en algunas empresas de servicios entendieron que la pérdida de la fuente de trabajo era la antesala de su marginación del mercado laboral, del alejamiento de los circuitos de la economía formal y de la degradación de su calidad de ciudadanos.

De acuerdo a la información que proporcionan las diversas fuentes consultadas para este artículo, en 2010 existían más de 100 fábricas recuperadas por sus trabajadores. La magnitud y extensión de esta práctica social dio lugar a la conformación de un verdadero movimiento. Sobre este aspecto es conveniente señalar que las cifras que habitualmente se citan son un valor aproximado, ya que hay discrepancias en cuanto a la clasificación de las empresas bajo control de los trabajadores. En algunas fuentes se mencionan a los establecimientos como “recuperados”, en otras como “tomados” y, en ciertos medios de prensa o estudios académicos se los caracteriza como “gestionados”. No obstante la diversidad de denominaciones, el rasgo común de estas experiencias es la reapertura de los establecimientos por iniciativa y bajo control de sus trabajadores (Heller, 2004).

El surgimiento y desarrollo del movimiento de empresas recuperadas ofrece un abanico relativamente amplio de experiencias de luchas reivindicativas y de organización de la producción a través de formas autogestivas. Como *referentes emblemáticos*, en este artículo se presentan los casos de Cerámica Zanón, en la Provincia de Neuquén, de Sasetru, productora de alimentos, ubicada en la localidad de Sarandí, entre los municipios de Avellaneda y Lanús, y la fábrica Brukman Confecciones, en la ciudad de Buenos Aires.

Por lo tanto, el criterio a partir del cual se presentan los análisis de casos obedecen a la *relevancia social y al enorme efecto de demostración política* que tuvieron los procesos de recuperación de las fábricas mencionadas en el conjunto de empresas rescatadas por sus trabajadores.

Zanón: de empresa modelo al vaciamiento patronal

Cerámica Zanón S. A. llegó a transformarse en pocos años en una empresa líder en su ramo. Hacia mediados de los noventa exportaba a más de 30 países y cubría el 20 por ciento del mercado interno. Los archivos contables consultados por los propios trabajadores, cuando la fábrica fue ocupada, demuestran que la facturación media anual superaba los 90 millones de dólares. La familia Zanón había sabido ganarse el favor y las simpatías de la clase política que controla la Provincia de Neuquén y de no pocos funcionarios nacionales. Por ese camino, Cerámica Zanón disfrutaba de un trato preferencial que incluía la exención de impuestos, acceso a programas de promoción industrial y extracción de materias primas (tierras y arcillas especiales) en zonas que pertenecían a las comunidades mapuche, a precios inferiores a su valor real. Contra lo que pudiera pensarse, cada vez que el sindicato discutía una revisión del contrato colectivo o un ajuste de salarios, la actitud de la gerencia era negar los incrementos o mejoras argumentando una situación de insolvencia o de caída en las ventas. De esta forma, fue generalizándose en el cuerpo de delegados la percepción

de que se estaba ante un proceso de “vaciamiento gradual” de la empresa como parte de una maniobra orquestada por sus mismos propietarios. Bajo estas condiciones de sospechas y reclamos mutuos, y cuando la conformación de la comisión interna estaba constituida por delegados democráticamente elegidos, la muerte accidental de un obrero durante el desarrollo de sus labores actuó como detonante de un paro de actividades y jornada de protesta en julio de 2000.

Este hecho abrió una nueva etapa de conflictos en los que se condensaron dos reclamos principales: la revisión y adecuación del sistema de seguridad e higiene en el trabajo, y el pago de los aguinaldos adeudados. La actitud de la gerencia fue deslindarse del problema convocando a un concurso de acreedores, ofreciendo “retiros voluntarios” y amenazando con despidos sin indemnización a quienes se declararan en huelga. En esta nueva etapa la lucha obrera debía responder a tres instancias principales de interlocución y conflicto: la gerencia encargada de la administración de la empresa; el Estado en presencia de las autoridades laborales, y la antigua dirigencia burocrática del sindicato que aún permanecía enquistada en la conducción del gremio y que apoyaba las medidas de “ajuste preventivo” dispuestas por la empresa. Mediante la redacción y firma de un pliego petitorio, suscrito por todos los trabajadores de la planta, la comisión interna logró abrir y ocupar un espacio en las negociaciones que se efectuaban en el Ministerio de Trabajo entre los representantes patronales y la dirigencia oficial del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén. No obstante, este avance decisivo tuvo que enfrentar nuevas maniobras destinadas a impedir la presencia de la comisión interna en la revisión de los acuerdos obrero-patronales y afrontar amenazas de despido. Este conflicto culminó con el estallido de una huelga que duró 34 días y que se llevó a cabo durante los meses de abril y mayo de 2001.

En el tiempo en que se desarrolló la huelga, los trabajadores alcanzaron dos metas fundamentales que marcan un salto cualitativo: lograron “sacar el conflicto de la fábrica” y volverlo un asunto de interés general al plantear sus demandas también fuera del establecimiento. Al reclamar “puertas afuera” otros sectores de la sociedad neuquina comprometieron su solidaridad con la huelga, esto permitió alcanzar un segundo objetivo de relevancia: tejer una amplia red de alianzas solidarias que incluyó al Movimiento de Trabajadores Desocupados de Neuquén (MTD), a diversos gremios de los sectores industrial y de servicios, docentes y estudiantes de la universidad local y personal médico y paramédico de clínicas y hospitales. Con el conjunto de fuerzas aliadas se conformó un ámbito multisectorial: la Mesa Coordinadora del Alto Valle que jugó un papel crucial en el apoyo a la huelga de Zanón. Esta vinculación de los obreros de Zanón con el movimiento de los trabajadores desocupados en el marco de una coordinadora multisectorial generó condiciones adecuadas para ampliar el debate y arribar a una nueva perspectiva de la cual se derivó la propuesta de estatización de la planta bajo control obrero (Brat, 2006; Meyer, 2004).

La patronal, por su parte, decidió apagar los hornos, detener la producción y acelerar el cierre de la planta. Resultó evidente que estaba en marcha un *lockout patronal*, por lo cual los obreros en huelga llevaron el problema ante la justicia donde se logró un pronunciamiento favorable. La gerencia desconoció el fallo y reclamó el desalojo de las instalaciones de la planta. En este momento los trabajadores ponen a producir la fábrica, después de sortear enormes obstáculos como reconectar el suministro de gas, encender los equipos y obtener crédito para la compra de materias primas. Esta nueva organización de la producción, bajo la responsabilidad de los obreros, siguió un esquema de funcionamiento sustentado en los principios establecidos por los propios trabajadores: toma de decisiones en asamblea, división en comisiones de trabajo e igualdad de salarios.

Los trabajadores ceramistas, organizados de manera autogestiva, tienen plena conciencia de que el funcionamiento de la empresa no llega todavía a cubrir la capacidad potencial de producción de la planta de acuerdo a la maquinaria instalada. No obstante, han podido demostrar su capacidad de gestionar la fábrica prescindiendo del control de los antiguos gerentes, incorporar a los trabajadores despedidos y protagonizar una experiencia colectiva, vital para el movimiento de empresas recuperadas. Constituyen uno de los pivotes fundamentales de un proceso social más vasto cuyas proyecciones aún no pueden apreciarse en toda su dimensión.

El caso Sasetru: iniciativa obrera y apoyo vecinal

En la localidad de Sarandí, coincidiendo con el cruce de camino General Belgrano y Madariaga, sobre el límite entre los municipios de Avellaneda y Lanús, el enorme terreno de casi una docena de hectáreas donde hasta 1981 funcionaba Sasetru –uno de los gigantes alimentarios más grandes de América Latina–, en el año 2000 sólo mostraba basura, pastizales y ratas que caminaban sobre los residuos (*El País*, 1981). Donde antes estuvo la fábrica, podía verse el esqueleto de un edificio ruinoso con las viejas máquinas herrumbreadas aún en su lugar. Dos décadas antes, más de dos mil obreros trabajaban en el lugar y casi veinte mil más encontraban sustento en la cadena de transporte, distribución y comercialización que se estructuraba en torno a Sasetru. De aquel establecimiento salían aceites, harinas, cereales, pastas, conservas y toda una línea de productos que, como el trabajo de los obreros, se esfumó con el vaciamiento y el cierre de la empresa. La mayoría de los trabajadores ni siquiera cobró su indemnización y diversos grupos “mafiosos”, como el de los ex-banqueros Trozzo y capitales privados vinculados al *Opus Dei*, encontraron en el desastre una suculenta fuente de negocios. Alrededor de lo que había sido Sasetru decenas de plantas industriales quedaron vacías, muertas como toda esa antigua zona industrial.

Esa era la situación hasta las 10 de la mañana del 30 de enero de 2003, cuando casi 500 vecinos y ex trabajadores de Sasetru entraron en el predio al grito de “¡Piqueteros,

carajo!”. La guardia de seguridad no ofreció resistencia. Así, en columna, marcharon desde el antiguo portón de ingreso hasta la planta abandonada, unos 150 metros más adelante (Colectivo lavaca, 2004; Heller, 2004).

Casi enseguida se hizo la primera asamblea. En ella hablaron, entre otros líderes sociales, representantes de diversas organizaciones de trabajadores desocupados y delegados de comisiones internas de industrias recuperadas. De inmediato se organizaron comisiones de prensa y difusión, de limpieza, preparación de alimentos y seguridad.

En ese momento, los problemas más elementales estaban resueltos: provisión de agua y electricidad; acondicionamiento precario del lugar para sostener la ocupación, y comida preparada por familias de Villa Corina, un barrio pobre vecino a la empresa. Al anoecer, con simples herramientas de mano, los obreros ya habían empezado a transformar el pastizal, habitado por ratas, en un sitio limpio, en un lugar de trabajo.

Es importante reiterar que la reapertura de las plantas que permanecen inactivas –Zanón y Sasetru, entre otras– constituye un aspecto sustantivo de la resistencia social, y ha pasado a ser patrimonio común del movimiento piquetero. Diversas organizaciones de trabajadores desocupados han encabezado este reclamo, planteando, frente a las autoridades, la reapertura de diferentes fábricas y pidiendo el auxilio del Estado para todas las empresas bajo gestión obrera, lo que de manera concurrente, con un plan de obras públicas, permitiría absorber la mano de obra desplazada. Con la difusión de estas experiencias se incorporó, al pliego de reclamos, el listado de establecimientos de cada zona que permanecen inactivos y que podrían volver a producir. Esta demanda expresa una vía de solución para miles de desocupados y crea las condiciones propicias para fusionar a trabajadores ocupados y desempleados en un único movimiento común de lucha por la defensa y recuperación de puestos genuinos de trabajo.

El movimiento piquetero no ha esperado la aprobación de las autoridades para llevar a la práctica este programa. La ocupación de Sasetru es indudablemente pionera en la materia. Hasta 2002, la recuperación de empresas estuvo limitada a establecimientos que venían funcionando o que habían dejado de hacerlo hace muy poco tiempo, y fueron los trabajadores, que revestían como parte del plantel de la fábrica, quienes tomaron la iniciativa de volver a reactivar la producción. El impulso, en el caso Sasetru, nace desde “afuera”. Ya no es obra de los directamente afectados, quienes, ante la amenaza de quedar en la calle, toman la determinación de ocupar la fábrica y ponerla a funcionar de nuevo.

La experiencia que se analiza representa un salto cualitativo. En coyunturas de crisis,

la acción de la clase obrera no se circunscribe a defender los puestos de trabajo existentes, sino que adopta la iniciativa para generar nuevas opciones de empleo. No se subordina a la espera de que las políticas públicas generen los puestos de trabajo o algún sector empresarial los conceda, sino que toma en sus manos la tarea. En esto reside el enorme significado político de la recuperación de Sasetru, en la medida en que expresa la tendencia y disposición que anida en las agrupaciones piqueteras para reconstruir el aparato productivo, con su participación como fuerza movilizadora y sobre nuevas bases sociales (Fajn, 2003).

Cabe destacar que entre otras peticiones, los reclamos centrales de la Comisión Interna de Sasetru, que asumió el control de la fábrica, eran la expropiación definitiva y sin pago de todas las empresas que cierren o despidan a sus trabajadores, empezando por las ya recuperadas, además de solicitar: 1) auxilio económico del Estado mediante subsidios no reintegrables, que permitan obtener a las gestiones obreras capital de trabajo y sueldos que no resulten inferiores a los de convenio; 2) que todas las fábricas expropiadas y bajo gestión obrera se constituyan en proveedoras privilegiadas del Estado, y 3) nacionalización de la banca. Que deberán integrar en su directorio a representantes de las fábricas bajo gestión de sus trabajadores para orientar el crédito y colocar los recursos financieros del país al servicio de los emprendimientos que operan bajo la responsabilidad de los mismos obreros.

En agosto de 2003, la resistencia obrera dio sus frutos y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires confirmó la media sanción del Senado y el proyecto de expropiación se transformó en ley.

La reapertura de Sasetru reviste un carácter estratégico para el movimiento de empresas recuperadas porque sirvió para demostrar, a los ojos de toda la sociedad, que el principal obstáculo para sacar adelante la producción es la gestión corrupta de los empresarios que propiciaron la quiebra fraudulenta de sus establecimientos. Sasetru es una empresa que pertenece al ramo alimentario, en particular al relacionado con la elaboración de aceites y harina. Esta referencia no es un aspecto menor, es un dato emblemático de la situación política, ya que revela hasta qué punto la iniciativa de administración autogestionaria de los trabajadores está incursionando en los centros vitales de la economía.

La experiencia de Brukman Confecciones: la hora de las mujeres piqueteras

Esta planta textil creada por una familia de inmigrantes se encuentra ubicada en un populoso barrio de la ciudad de Buenos Aires y ocupa mayoritariamente fuerza laboral femenina. A diferencia de la experiencia de los obreros de Zanón, en Brukman no

existía, en la etapa previa al cierre, ningún antecedente significativo de auto-organización y confrontación con la patronal. Al iniciarse el conflicto, cuando había indicios claros del vaciamiento de la fábrica por parte de sus dueños, los trabajadores se vieron obligados a afrontar un doble desafío: consolidarse y fortalecerse como grupo, y ocupar la empresa para ponerla a producir bajo su propio control. De manera similar a lo ocurrido en Zanón, el cierre de la fábrica fue precedido por conflictos salariales, la gerencia dispuso el cese de un grupo de obreras y de empleados por reclamar sus adeudos que incluían cinco meses de vacaciones, aportes patronales al sistema de seguridad social, aguinaldos y salarios familiares, entre otras demandas. A las peticiones económicas se sumaban casos de prepotencia, arbitrariedad y trato humillante a fin de obligar a los trabajadores a sostener ritmos de producción impuestos unilateralmente por la gerencia (Viglicca, 2003).

Como se describe, los antecedentes de malos manejos y decisiones arbitrarias eran abundantes, no obstante, la súbita ausencia de los patrones que dejaron de concurrir a las oficinas de la empresa y el abandono de la fábrica sorprendió a las obreras el 18 de diciembre de 2001, en vísperas de la rebelión popular que derrumbó al gobierno del presidente Fernando de la Rúa. Los representantes legales de los propietarios tampoco asistieron a las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo para los días 21 y 26 de diciembre. Motivados por los actos de protestas de los días 19 y 20 de ese mes, los trabajadores y empleadas decidieron trasladar el conflicto a las calles, y en repetidas ocasiones cortaron el tránsito en la avenida Jujuy del populoso barrio del Once. Estos actos en la vía pública contaron con el creciente apoyo de vecinos, comerciantes, agrupaciones estudiantiles, organismos de trabajadores desocupados, obreros de empresas recuperadas o en conflicto y asambleas vecinales surgidas en las jornadas de los días 19 y 20 de diciembre. Poco después de un mes de ocupada la fábrica, las trabajadoras de Brukman efectuaron la primera venta de existencias para invertir esos recursos en el reinicio de la producción bajo un sistema de control autogestionado. Sin embargo, cuando la situación parecía consolidarse, el 16 de marzo de 2002 se produjo el primer intento de desalojo por parte de la policía que fue impedido por la movilización solidaria de los mismos sectores que habían apoyado la ocupación de la fábrica. La ofensiva jurídico-patronal se repitió en dos nuevas oportunidades en las que se intentó desalojar la planta haciendo uso de la fuerza pública y acusando a las trabajadoras y empleados de sustraer mercancías y dañar las maquinarias.

Desde el inicio del conflicto, y en particular a partir de la ocupación de la fábrica, las obreras de Brukman –pese a su escasa experiencia y baja participación en cuestiones sindicales– adoptaron la asamblea como mecanismo de funcionamiento colectivo y toma de decisiones por mayoría. Un aspecto relevante de estos primeros pasos como organización autogestiva es la constitución de coordinadoras y redes solidarias que conformaron un verdadero tejido de contención y apoyo. Este entramado solidario

detuvo las maniobras patronales destinadas a desalojar la empresa y fincar responsabilidades penales a las trabajadoras que ocuparon la planta y pusieron a andar las maquinarias.

Durante el año 2002 tuvieron lugar numerosos encuentros de coordinación entre estas experiencias, inicialmente dispersas, que permitieron acordar la instrumentación de acciones conjuntas. Es importante consignar el Encuentro de Fábricas Ocupadas, que se llevó a cabo frente a las puertas de la empresa Brukman el 23 de abril de 2002. Además de haber sido el primero de ese carácter y magnitud, se aprobó, por amplia mayoría, la edición de un periódico como herramienta de difusión “hacia afuera” de las actividades del movimiento y también como espacio de encuentro, conocimiento mutuo y coordinación de las acciones de protesta. En esta iniciativa no sólo participaron representantes de Zanón y Brukman, se sumaron los delegados democráticamente elegidos del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Neuquén, Movimiento de Trabajadores Desocupados de esta misma provincia y el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba. Otro hito importante en el desarrollo de esta experiencia de construcción de redes solidarias fue otro evento: Encuentro de Fábricas Ocupadas y Empresas en Lucha que también se realizó frente a las puertas de Brukman el 7 de septiembre de 2002. De este acto nació una consigna común que se transformó en una idea-fuerza: “Si nos tocan a unos, nos tocan a todos”, con la cual se expresaba que el hostigamiento o represión sobre una de las empresas autogestionadas equivalía a agredir a todo el movimiento de fábricas recuperadas (Rebón y Saavedra, 2006).

Ocho meses de campamento callejero, de una resistencia ejemplar respaldada en todo momento por amplios sectores del movimiento popular, en particular por las organizaciones piqueteras, posibilitaron que las demandas se condensaran en un reclamo central: exigir, en todo momento, la expropiación de la fábrica y su puesta en marcha bajo gestión obrera (Vales, 2003).

La expropiación finalmente fue votada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, aunque con algunos retrocesos respecto de otras expropiaciones precedentes. Por ejemplo, en el caso de Brukman, la ley expropiatoria introduce una cláusula que obliga al ingreso compulsivo de los trabajadores que no apoyaron la toma de la fábrica.

Las trabajadoras, al reingresar en la planta, encontraron tierra arrasada: las máquinas estaban destruidas, las piezas más importantes y caras de la computadora de diseño habían sido robadas. Las calderas, el sistema eléctrico y las tuberías de aire comprimido fueron intencionalmente dañadas. Esa era la obra de agentes enviados por el propietario Jacobo Brukman y de los empleados que permanecieron ajenos al movimiento y habían entrado a la fábrica con protección policial mientras los trabajadores se encontraban desalojados. Igual que en Sasetru, algunos grupos

protegidos por la patronal habían saqueado las maquinarias que no supieron ni quisieron mantener en funcionamiento.

Poco después, una asamblea de fábrica ratificó el rechazo al *ultimatum* judicial y ratificó la continuidad de la ocupación, además de reiterar las demandas de los trabajadores:

- Pago de la deuda salarial y de los sueldos caídos durante los últimos meses.
- Estabilidad para todo el personal, asegurándose la totalidad de los puestos de trabajo.
- Reapertura de la fábrica, respetándose el salario completo de los trabajadores.
- Veedores obreros para controlar la producción y la administración de la planta.

A todo esto, a mediados de julio de 2002, en una declaración pública los trabajadores de Brukman daban a conocer una declaración que, entre otras cosas, decía:

Frente al abandono total de la patronal, los trabajadores de Brukman llevamos siete meses de lucha en este conflicto y seis meses de producción, durante los cuales pasamos por innumerables obstáculos de toda índole, desde los problemas sociales, económicos y políticos, las luchas internas y, por otro lado, la lucha contra la burocracia sindical y la patronal (...) no aceptamos a la patronal en la fábrica porque ya no la necesitamos (...) Por tanto, los trabajadores de Brukman seguiremos luchando por la estatización de la fábrica bajo control obrero como única alternativa viable, demostrada a través de un proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Heller, 2004:193 y 299).

El 3 de octubre de 2002 toda la fábrica se movilizó a la Legislatura. Esa marcha coincidió con una jornada de lucha aprobada por la Asamblea Nacional de Trabajadores (instancia que agrupa a organizaciones piqueteras y representantes de empresas recuperadas) que horas antes había empezado a bloquear los accesos a la Capital Federal en reclamo por la libertad de los piqueteros detenidos en la norteña Provincia de Jujuy y que terminó, precisamente, en la sede de la Legislatura para respaldar a las fábricas ocupadas.

Allí, los trabajadores de Brukman entregaron a diputados de la Comisión de Desarrollo Económico un petitorio que exigía:

- a) La expropiación sin pago, inmediata y definitiva de inmuebles, maquinaria y marcas de Brukman Confecciones, para que los trabajadores continúen con la producción bajo gestión obrera.
- b) Que el Estado garantice los salarios, como mínimo los de convenio.
- c) Que el Estado otorgue subsidios no reintegrables por 150 mil pesos, para ampliar

y diversificar la producción e incorporar a más trabajadores, actualmente desocupados, mediante la creación de una escuela de oficios.

d) Que el Estado compre la producción en función de las necesidades de hospitales, escuelas y otras instituciones, así como de la población de escasos recursos, que requieran indumentaria que la empresa pudiera producir.

En estas condiciones las trabajadoras y empleados de Brukman estaban dispuestos a discutir la forma legal con la cual organizarse, pero admitiendo que los trabajadores decidieran en su asamblea soberana quienes forman parte de la fábrica bajo gestión obrera.

La fecha clave del litigio legal entre trabajadores y accionistas de la empresa fue el jueves 30 de octubre de 2003, la Legislatura, bajo presión de una concentración masiva de trabajadores, aprobó la expropiación parcial de Brukman y su entrega a un comité constituido por sus trabajadores. La ley se aprobaba después de un año y medio de dilaciones y trampas para que la familia Brukman pudiera recuperar la fábrica que había abandonado en 2001.

Ese mismo decreto demoraba la entrega de la empresa a los trabajadores, y una cosa y la otra estaban vinculadas: las dilaciones apuntaban a facilitar el ingreso de los obreros y empleados que no participaron de la ocupación de la fábrica y, al mismo tiempo, trataban de convertir a Brukman en un establecimiento bajo el régimen de Pequeña y Mediana Empresa (PYME) con recursos monetarios de los antiguos dueños.

Hacia mediados de 2005, los trabajadores comenzaron una nueva etapa de movilizaciones, ahora contra el decreto del entonces intendente Aníbal Ibarra y por la completa soberanía de la asamblea de fábrica para tomar cualquier decisión referida al funcionamiento de la cooperativa.

Organización autogestiva o control obrero de la producción: el debate en el movimiento de empresas recuperadas

Casi desde los inicios del movimiento de toma de fábricas y empresas por parte de sus propios trabajadores –algunas cerradas y otras declaradas en quiebra– se generó un debate, que aún persiste, acerca de las formas asociativas más viables para lograr el éxito de los procesos de autogestión obrera. Para todos quedaba claro que poner a producir las fábricas bajo la responsabilidad de sus propios trabajadores constituía una de las expresiones más significativas de la resistencia social. También resultaba evidente que la ocupación de los establecimientos no se correspondía con una etapa de ascenso de las luchas obreras ni de un mandato nacido de la vieja utopía socialista

que parecía ya olvidada. *La toma de las empresas había surgido de una necesidad primaria y de un fuerte impulso defensivo: salvaguardar el funcionamiento de las fuentes de empleo.* Este movimiento, que reconocía antecedentes desde 1996 pero que como tal floreció al calor de la rebelión social que estalló el 19 y 20 de diciembre de 2001, trajo aparejada una polémica que envolvió rápidamente a sus protagonistas: ¿Y ahora qué sigue? ¿Cooperativas, expropiación o devolución de las empresas a sus antiguos dueños con participación de los trabajadores? Expresada de manera más simple: autogestión o control obrero de la producción (Magnani, 2003; Saavedra, 2005).

Los trabajadores de las empresas ocupadas están agrupados en dos instancias organizativas principales: el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) y el Movimiento de Fábricas Recuperadas (MFR), surgido de una ruptura con el MNER a comienzos de 2003. Existen otros agrupamientos que, pese a tener un nivel de implantación menor, han alcanzado una presencia significativa en algunas localidades y municipios. En la ciudad de La Plata la mayoría de las empresas recuperadas se nuclean en la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo y Empresas Reconvertidas (Fencooter). Esta Federación promueve la conformación de cooperativas y defiende la expropiación de las empresas en quiebra con cargo a las deudas salariales de los trabajadores. Aunque la Fencooter existía antes de la generalización de las ocupaciones fabriles su membresía creció a partir de 2001.

Con una posición crítica del cooperativismo y una línea política cercana a la izquierda insurreccional, se encuentra la Comisión Nacional de Empresas Recuperadas y en Lucha. Esta organización promueve el modelo de estatización bajo control obrero y la expropiación de las fábricas sin indemnizar a los patrones. Rechaza la forma jurídica de la cooperativa por entender que esta figura asociativa representa una puerta falsa para el movimiento piquetero, al alejar a los trabajadores de la lucha política y confundirlos con los espejismos de la competencia económica (Almeyra, 2003a y 2003b; Bialakowsky, 2005).

Pese a las diferencias de criterios políticos y organizativos, el MNER y el MFR protagonizaron importantes acciones coordinadas que lograron la promulgación de la Ley 5708 en la Provincia de Buenos Aires. Mediante este instrumento jurídico se faculta al gobierno a expropiar los bienes inmuebles y otorgarlos a los trabajadores bajo el régimen de comodato y, en casos especiales, en calidad de donación.

Aún con acuerdos importantes subsisten diferencias de fondo entre estos dos movimientos y otras experiencias de fábricas ocupadas en cuanto a las formas organizativas que deben adoptar las empresas recuperadas. La propuesta “autogestionaria” y de asociación de tipo cooperativa es sostenida por la mayoría de las empresas que fueron ocupadas y son conducidas por sus trabajadores. El MNER es

una de las organizaciones que afirma que los obreros responsables de las ocupaciones de los establecimientos deben transformarse en “nuevos patrones”. Desde esta perspectiva, el funcionamiento de las cooperativas en el marco de una economía de mercado no es obstáculo para lograr una operación rentable por parte de las empresas autogestionadas. Este tipo de propuestas reconoce antecedentes muy antiguos en las corrientes de la llamada “izquierda reformista”, en los partidos social-demócratas y en algunas experiencias del “mutualismo obrero” europeo. De acuerdo a esta vertiente del pensamiento socialista, los trabajadores tienen la capacidad de promover la instauración de una red de empresas autogestionadas, establecimientos que darían pie a la formación de una economía solidaria que estaría en condiciones de consolidarse, gradualmente, a la sombra del mercado. Ese progreso, lento y por etapas, culminaría, en algún momento, con la reducción del mercado capitalista a ciertas esferas específicas de la producción frente a círculos más amplios constituidos por actividades que responden a formas organizativas autogestionarias.

Al solicitarse la sustitución de los antiguos patrones por una dirección obrera colectiva se plantea la necesidad de garantizar una gestión eficiente de las empresas y otorgarles soporte mediante la conformación de redes solidarias de intercambio de bienes y servicios. Esta tendencia, que resulta mayoritaria en el MNER y en el MFR, buscó acuerdos básicos con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien se hizo cargo del Poder Ejecutivo el 25 de mayo de 2003. La cercanía de ambas agrupaciones con el nuevo gobierno profundizó las diferencias con los grupos de izquierda que impulsan el “control obrero” de las fábricas bajo un régimen de expropiación de las mismas, o bien, después que los establecimientos hayan sido “rescatados” por sus antiguos patrones (Boyanovsky Bazán, 2010).

Para el MNER y el MFR la reforma a la Ley de Quiebras es un paso fundamental para acceder al pleno control de las empresas ocupadas (Hauser, 2003). Irina Hauser, reportera del diario *Página 12*, destaca que el eje de la petición del MNER, dirigida a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es la promulgación de una “ley especial de propiedades fallidas” para que las fábricas sean automáticamente expropiadas por el Estado. Una vez decretada la quiebra se otorga a los trabajadores el manejo de la empresa por un plazo de dos años con opción a compra después de cumplido ese tiempo. Algo similar se propone con la conformación de un “fondo fiduciario” cuyos recursos tendrán como contrapartida un reaseguro a cargo de las empresas autogestionarias, serán los propios trabajadores quienes ofrecerán las garantías que se necesitan para asegurar la devolución de la deuda. Se trata, de alguna manera, de un préstamo que se sujeta al desempeño de la gestión obrera al frente de los establecimientos ocupados.

El tema jurídico constituye uno de los espacios de mayor controversia dentro del movimiento de empresas recuperadas. Una demanda sustantiva de los trabajadores

es obtener la promulgación de una ley que norme la realidad jurídica del fenómeno de la ocupación de empresas por parte de su personal. El debate por la posesión y distribución del patrimonio constituye una pieza fundamental del diferendo. Es necesario dirimir cuestiones preexistentes a la toma de las empresas, entre otros aspectos debe considerarse el endeudamiento heredado, la situación patrimonial actual y las formas jurídicas, así como el diseño administrativo que se derivará a partir del marco legal que se sancione. Para las fuerzas políticas conservadoras, las instancias legales han sido el espacio adecuado para bloquear las iniciativas obreras y dilatar la resolución jurídica de las controversias entre los antiguos patrones y los trabajadores que ocupan los establecimientos (*Página 12*, 30 de enero de 2013).

El pliego de demandas incluye otros aspectos igualmente significativos para la consolidación del movimiento de empresas recuperadas y el desarrollo exitoso de sus acciones futuras. Entre otras reivindicaciones es preciso señalar las siguientes:

1. Modificar la Ley de Quiebras y formular un nuevo instrumento jurídico que reconozca al trabajo como un bien de carácter social, de tal manera que toda unidad productiva que cierra sus puertas o que entra en proceso de quiebra pueda ser legalmente transferida a sus trabajadores si éstos reclaman el control de la misma.
2. Propiciar la creación de una sociedad de garantías recíprocas integrada por las empresas que forman el movimiento de establecimientos recuperados, mutuales, cooperativas, el Estado y los bancos oficiales.
3. Impulsar la creación de un Fondo Fiduciario que surja del aporte de las empresas recuperadas y del Estado para constituir capital de trabajo destinado a fortalecer a las empresas que comienzan a desarrollar sus actividades.
4. Establecer acuerdos de colaboración con las universidades e institutos de investigación a través de los cuales se logre el apoyo de especialistas que permitan establecer indicadores operativos de eficiencia acordes a las actividades productivas que desarrollan las empresas recuperadas.
5. Impulsar la constitución de redes de consumidores, usuarios y pequeños comerciantes con el fin de defender sus derechos y promover políticas que impulsen el consumo de bienes de origen nacional, como una vía para garantizar la permanencia de las fuentes de trabajo y propiciar la generación de empleos.

Como señalamos, la mayoría de las empresas recuperadas adoptaron la forma jurídica que norma el funcionamiento de las cooperativas. Algunos estudios estiman que alrededor de 93 por ciento de estas empresas están organizadas bajo esta forma asociativa, 4.7 por ciento son sociedades de responsabilidad limitada y 2.3 por ciento

optaron por un esquema organizativo particular que definen como “estatización con control obrero”, figura asociativa que no es considerada en la legislación vigente.

La variedad de experiencias y, en algunos casos, las divergencias de orden político-ideológico hacen que el debate persista sobre una realidad que aún no existe en los dispositivos legales, y donde la promulgación de un nuevo marco jurídico es una asignatura pendiente. Los casos de empresas que siguen operando bajo control de sus empleados asociados como cooperativistas muestran diversas formas de vincularse con el mercado y con sus antiguos propietarios. Algunas cooperativas establecieron acuerdos con los anteriores dueños bajo la figura de “alquiler de la empresa”, otros propietarios traspasaron el paquete accionario a los trabajadores, o sólo entregan la gestión del establecimiento. Por último, se registran experiencias en las que se logra un acuerdo con los propietarios que posibilita la integración de los mismos en el nivel gerencial de la cooperativa junto con los trabajadores (Fajn, 2005).

Del proceso que se describe se deriva un elemento de importancia medular en el fenómeno de recuperación de las empresas por parte de sus trabajadores. Se trata de la particular relación que sostienen éstos con las representaciones sindicales formales. Hay un factor de conflicto en esta peculiar vinculación de dos sectores que integran el mundo del trabajo, muchos de los obreros de los establecimientos recuperados fueron, hasta hace pocos años, trabajadores sindicalizados, sin embargo, el proceso posterior de rehabilitación de las empresas los convirtió en socios cooperativistas. Esta situación generó una dualidad de expectativas, para algunos de los segmentos obreros comprometidos en labores autogestionarias y asociativas la antigua relación sindical sigue constituyendo el núcleo de su vinculación con los demás integrantes de la sociedad del trabajo. Por el contrario, existen corrientes del movimiento de empresas recuperadas que prefieren estrechar lazos con otras cooperativas, mientras que una franja con posiciones críticas –hacia las formas asociativas conocidas– no descarta el retorno de las empresas a sus antiguos propietarios o la expropiación de las mismas dentro de un marco de relaciones laborales que aceptan una mayor presencia y capacidad de decisión de los trabajadores con respecto al funcionamiento de la empresa en la etapa anterior a la crisis. El personal de Zanón y Brukman Confecciones optó por este planteo que se difundió con el nombre de “expropiación con control obrero”.

Desde este enfoque, promovido mayoritariamente por las corrientes troskistas y “consejistas” de la izquierda, se impugna la estrategia cooperativista y autogestionaria, y se plantea, como alternativa, el control obrero de la producción dentro de una relación capital-trabajo que guarda cierta similitud con la que se registra en todas las empresas en manos del sector privado.

Un aspecto de particular relevancia, en este difícil entramado de grupos de trabajadores

protagonistas del movimiento de empresas recuperadas, es el tema de las incipientes relaciones entre los obreros y empleados de los establecimientos rehabilitados, y el acceso a las obras sociales de los sindicatos que prestan servicios de atención médica a sus afiliados. Este tipo de vinculación procura restablecer las relaciones orgánicas entre estos trabajadores y los sindicatos a los cuales pertenecieron hasta hace algunos años. La experiencia más lograda en esta materia es la que lleva a cabo la Unión Obrera Metalúrgica que permite el acceso a los servicios de salud a los trabajadores de las empresas recuperadas de este sector industrial. No obstante, son todavía serias las dificultades que tienen las organizaciones formales del movimiento obrero para adaptarse y responder a las necesidades que, en materia de solidaridad política y obras sociales, reclaman los obreros de los establecimientos autogestionados (Palomino, 2005). Al referirse a la actitud de las organizaciones obreras frente al movimiento de empresas recuperadas por sus trabajadores, Palomino afirma que: “los sindicatos reaccionan con conductas y respuestas aprendidas históricamente ante un contexto inédito: ante problemas nuevos, proponen soluciones tradicionales” (*Ibid.*:41).

Las propuestas cooperativistas y autogestionarias suelen ser impulsadas también por algunos sectores de la izquierda que entienden a los procesos sociales como un movimiento constante de “acumulación o construcción de poder” en un marco, más general, definido por una cambiante correlación de fuerzas entre el “campo popular” y las clases y sectores sociales dominantes. La tradición marxista europea, que se inspiró en el pensamiento del gran teórico del comunismo italiano Antonio Gramsci y, más recientemente, en los aportes del pensador francés Michel Foucault, dio sustento a la propuesta que sostiene una estrategia “gradualista” de *construcción de espacios de poder alternativo* en los distintos resquicios de la sociedad capitalista. Más que en un asalto al Estado, se piensa en un despliegue de fuerzas contrapuestas en el contexto de un conflicto de “guerra de posiciones”, o lo que es lo mismo, procurar la ocupación de las trincheras enemigas como parte de un proceso que debe culminar en un punto de acumulación de poder que posibilite la ruptura con el orden estatal dominante.

Esta tesis es duramente criticada por las corrientes más tradicionales de la izquierda que retoman los principios emanados de la experiencia soviética de 1917 sobre la naturaleza y el papel del Estado, y afirman la necesidad de entender, a esa máxima institución pública, como el punto más alto de condensación y centralización del poder de las clases dominantes. Desde este discurso, se cuestiona cualquier intento de agregación social que busque, por la vía autogestionaria, producir los bienes y servicios que antes se generaban bajo la tutela de un patrón o que intente construir redes solidarias de trueque o comercialización de productos. Este razonamiento queda atrapado en una lógica de naturaleza “insurreccional”, cuya única alternativa parece ser la de reeditar las jornadas de protesta social de los días 19 y 20 de diciembre de

2001. Por este camino, un nuevo “argentinazo” abrirá las puertas para la conquista de la gran utopía revolucionaria: el asalto a la Casa Rosada y la instauración del socialismo (*Clarín*, 2006).

Desde nuestra perspectiva, entendemos que lo más relevante es que, al margen de las diferencias y similitudes entre las múltiples experiencias de empresas ocupadas por sus trabajadores, *puede destacarse el hecho de que se logró difundir un principio auto-organizativo de carácter democrático que se sustenta en la discusión y decisiones tomadas en asambleas*. En la mayoría de los casos, después de haber recuperado las fábricas, se iniciaron fuertes debates acerca de la opción de producir bajo el sistema de “cooperativa-autogestionaria” o mediante la forma “estatización bajo control obrero”, tal como mencionamos en los párrafos precedentes. Pero, al margen de estas discrepancias, pensamos que el aspecto realmente sustantivo de estas experiencias es que sus protagonistas identifican un “antes” y un “después”. Es así como queda en la memoria colectiva el registro consciente de un cambio profundo en aspectos tan vitales para su vida cotidiana como es la percepción de haber establecido una nueva relación con los otros compañeros, con el mismo proceso de organizar y efectuar el trabajo, y con la empresa, como el lugar que además de permitir obtener un ingreso posibilita la generación de nuevos lazos de solidaridad. La relación con el “afuera” cobra una dimensión distinta. Es a partir del conocimiento y la posterior convergencia y movilización solidaria con otras experiencias hermanas de fábricas recuperadas, y con aquellos sectores populares en los que se descubre, paso a paso, una forma novedosa de comunidad en proceso de gestación, como puede iniciarse la búsqueda de alternativas sociales frente a los efectos devastadores de las políticas económicas neoliberales.

Bibliografía

- ALMEYRA, Guillermo (2003a), “Las fábricas *recuperadas* y la autogestión”, en *La Jornada*, México, 7 y 14 de diciembre.
- ALMEYRA, Guillermo (2003b), “Las fábricas *ocupadas* y la autogestión”, en *La Jornada*, México, 21 de diciembre.
- BASUALDO, Eduardo (2002), *Sistema político y modelo de acumulación en la Argentina*, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes/Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Instituto de Estudios Políticos.
- BIALAKOWSKY, Alberto (2005), “Nuevas formas de autogestión de los trabajadores en empresas recuperadas”, en BIALAKOWSKY, Alberto, Raquel PARTIDA *et al.*, *Trabajo y capitalismo entre siglos en Latinoamérica*, México, Universidad de Guadalajara.
- BOYANOVSKY BAZÁN, Christian (2010), *El aluvión. Del piquete al gobierno: los movimientos sociales y el kirchnerismo*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
- BRAT, Elio (2006), “17 mil firmas para no perder Zanón”, en *Página 12*, Buenos Aires, 2 de mayo.

- CIEZA, Daniel (2001), *De la cultura del trabajo al malestar del desempleo*, La Plata, Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Amérique Latine et les Caraïbes/Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires/Centro de Estudiantes de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata.
- CLARÍN (2004), "La CGT quiere que las obras sociales también atiendan a los desocupados", en *Clarín*, Buenos Aires, 4 de agosto.
- CLARÍN (2006), "Piqueteros y gremios: esta vez reinó la paz", en *Clarín*, Buenos Aires, 26 de mayo.
- COLECTIVO LAVACA (2004), *Sin Patrón. Fábricas y empresas recuperadas por sus trabajadores*, Buenos Aires, Lavaca Editora.
- EL PAÍS (1981), "Quiebra el mayor grupo financiero argentino", en *El País*, Madrid, 7 de febrero, <www.elpais.com>, consultado en abril de 2013.
- FAJN, Gabriel (2003), *Fábricas y empresas recuperadas. Protesta social, autogestión y rupturas en la subjetividad*, Buenos Aires, Centro Cultural de la Cooperación.
- FAJN, Gabriel (2005), *Fábricas recuperadas: la organización en cuestión*, Buenos Aires, <www.iisg.nl/labouragain/documents/fajn.pdf>.
- HAUSER, Irina (2003), "Las empresas recuperadas quieren una ley marco", en *Página 12*, Buenos Aires, 11 de noviembre.
- HELLER, Pablo (2004), *Fábricas ocupadas*, Buenos Aires, Ediciones Rumbos.
- MAGNANI, Esteban (2003), *El cambio silencioso. Empresas y fábricas recuperadas por los trabajadores en la Argentina*, Buenos Aires, Prometeo Libros.
- MARTÍNEZ, Enrique (2004), "Recuperar el trabajo común", en *Página 12*, Buenos Aires, noviembre, Suplemento. También en Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), disponible en <www.inti.gov.ar>.
- MEYER, Adriana (2004), "Es posible vivir sin el patrón", en *Página 12*, Buenos Aires, 21 de septiembre.
- PÁGINA 12 (2013), "Repudio a otro veto de Macri contra las fábricas recuperadas", en *Página 12*, Buenos Aires, 30 de enero.
- PALOMINO, Héctor (2005), "Los sindicatos y los movimientos sociales emergentes del colapso neoliberal en Argentina", en Enrique DE LA GARZA (compilador), *Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Colección "Grupos de Trabajo".
- REBÓN, Julián (2004), *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas*, Buenos Aires, La Rosa Blindada.
- REBÓN, Julián e Ignacio SAAVEDRA (2006), *Empresas recuperadas. La autogestión de los trabajadores*, Buenos Aires, Claves para Todos.
- SAAVEDRA, Laura (2005), "Entre la desocupación y la recuperación autogestiva de empresas: la configuración del espacio de las fábricas recuperadas", en Fortunato MALLIMACI y Agustín SALVIA (coordinadores), *Los nuevos rostros de la marginalidad*, Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires/Editorial Biblos.
- VALES, Laura (2003), "Nuestra lucha no fue en vano", en *Página 12*, Buenos Aires, 31 de octubre.

VIGLIECA, Olga (2003), “Triunfo de las obreras sin patrón, la expropiación de la fábrica Brukman”, en *La Jornada*, México, 1 de diciembre, Suplemento “Triple Jornada”.

Recibido: 30 de junio de 2013
Aprobado: 10 de enero de 2014